



Asamblea General

Distr. general
21 de diciembre de 2020
Español
Original: francés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 89º período de sesiones, 23 a 27 de noviembre de 2020

Opinión núm. 62/2020, relativa a Benoît Faustin Munene (República del Congo)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 6 de abril de 2020 al Gobierno de la República del Congo una comunicación relativa a Benoît Faustin Munene. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).



Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Benoît Faustin Munene es un militar y político de nacionalidad angoleña y congoleña (República Democrática del Congo). Reside en la República del Congo.

a) Hechos alegados

5. Según la fuente, el Sr. Munene fue el jefe de las fuerzas armadas de la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo-Zaire y contribuyó activamente a la caída del régimen de Mobutu, junto a Laurent-Désiré Kabila.

6. La fuente sostiene que, durante la Presidencia del Sr. Kabila, de 1997 a 2001, el Sr. Munene fue nombrado Viceministro del Interior y, más adelante, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Congolesas y Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Congoleña. Tras el asesinato del Sr. Kabila en 2001, el Sr. Munene fue apartado del Gobierno. Le fueron retirados progresivamente el estatuto y los privilegios de los que había gozado. Tras ser nombrado en cargos irrelevantes, con el pretexto de falsos ascensos, pasó finalmente al retiro forzado y fue puesto bajo vigilancia a partir de 2006.

7. La fuente explica que el Sr. Munene fundó entonces un partido político, la Convención del Pueblo para el Progreso y la Democracia, con el que concurrió a las elecciones legislativas. Sin embargo, todas las actividades políticas del flamante partido fueron obstaculizadas por el poder vigente.

8. La fuente sostiene que el Sr. Munene fue víctima, posteriormente, de varios intentos de asesinato y atentados contra su persona. En particular, en octubre de 2009 y en septiembre de 2010, un grupo de hombres armados atacó su residencia con armas pesadas y disparó contra su familia y el personal. Al parecer, una de sus hijas resultó muerta en el transcurso del segundo atentado. Esa es la razón por la que el Sr. Munene abandonó Kinshasa.

9. Según la fuente, el Sr. Munene se exilió el 29 de septiembre de 2010 en la República del Congo, donde fue acogido por las autoridades, que lo pusieron en régimen de “protección personal”.

10. La fuente señala que desde ese día el Sr. Munene sigue detenido sin cargos por las autoridades nacionales de la República del Congo, que le confiscaron su pasaporte de la República Democrática del Congo, así como su pasaporte angoleño. La fuente explica que, en un primer momento, el Sr. Munene quedó bajo arresto domiciliario en una mansión propiedad de la República del Congo ubicada en Ewo, en el oeste del país, cerca de la frontera con el Gabón. Las autoridades del país le aplicaron un régimen de vigilancia permanente con el pretexto de garantizar su seguridad. La fuente afirma que las condiciones del arresto domiciliario son sumamente estrictas: el Sr. Munene no puede circular libremente fuera de la residencia y sus jardines, guardias armados o de civil lo vigilan en todo momento, su comunicación se reduce al “mínimo estricto” y sus comunicaciones escritas o telefónicas son filtradas y supeditadas a solicitudes de autorización.

11. La fuente informa asimismo de que el 4 de marzo de 2011, durante un simulacro de juicio celebrado en la República Democrática del Congo, el Tribunal Militar de Matadi condenó en rebeldía al Sr. Munene a cadena perpetua por conspiración contra la seguridad del Estado. La fuente sostiene que el Tribunal nunca convocó al Sr. Munene ni le tomó declaración. La sentencia nunca le fue notificada y llegó a su conocimiento únicamente a través de la prensa. Tras la condena, la República Democrática del Congo solicitó su extradición, pero al parecer se topó con la negativa de la República del Congo.

12. La fuente añade que no se ha concedido ningún permiso de residencia al Sr. Munene. Ninguna decisión judicial justifica su privación de libertad. Por otro lado, no le es posible solicitar el asilo político u otros permisos de residencia al Comité Nacional de Asistencia a los Refugiados, organismo encargado de tramitar las solicitudes de asilo. Con el pretexto de una presunta asistencia humanitaria, el Sr. Munene se encuentra bajo la tutela de la República del Congo, detenido sin cargos, confinado en su domicilio y sometido a la vigilancia permanente de agentes estatales. Según la fuente, el Sr. Munene supone, de hecho, una valiosa moneda de cambio ante las autoridades de la República Democrática del Congo.

13. La fuente explica que en diciembre de 2017 el Sr. Munene intentó viajar al Gabón para presentar una solicitud de asilo ante las autoridades consulares suizas, que no están presentes en Brazzaville. Sin embargo, apenas cruzada la frontera, fue detenido y recluido por la policía de fronteras gabonesa por entrar ilegalmente en el país.

14. Sostiene que el 12 de enero de 2018 el Sr. Munene fue trasladado de vuelta a Brazzaville, donde permaneció detenido en los locales de la Dirección General de Vigilancia del Territorio, sin que ningún fundamento jurídico o decisión judicial lo justificara.

15. Según la fuente, a raíz de este encarcelamiento sin cargos, el abogado del Sr. Munene se puso en contacto con las autoridades de la República del Congo para conocer los motivos de su detención y solicitar su puesta en libertad. Escribió al Embajador de la República del Congo (carta de fecha 17 de mayo de 2018) y al Presidente (carta de fecha 31 de mayo de 2018) para resolver la situación. Posteriormente, se desplazó a la Dirección General de Vigilancia del Territorio con el objetivo de reunirse con el Sr. Munene, entre el 8 y el 15 de junio de 2018. Sin embargo, tras obtener un visado de las autoridades consulares congoleñas, recibió un correo electrónico el 6 de junio de 2018 en el que se le informaba, a instancias del Embajador de la República del Congo en Francia, de que le sería “útil” aplazar su viaje con el fin de evitar todo posible inconveniente. La fuente señala que el abogado del Sr. Munene viajó hasta el lugar y que las autoridades de la República del Congo intentaron disuadirlo de visitar a su cliente.

16. La fuente explica que, en el contexto de esta privación de libertad, el Sr. Munene solo tuvo acceso a atención médica primaria, pese a su crítico estado de salud (padece hipertensión y cáncer) y nunca pudo recibir un seguimiento médico adecuado. No pudo llevar a cabo ninguna consulta externa y especializada y nunca pudo salir para ser llevado a un entorno de atención médica.

17. La fuente señala asimismo que, además de la dificultad para comunicarse con su abogado, el Sr. Munene ha permanecido casi totalmente aislado de sus allegados, uno solo de los cuales tenía autorización para visitarlo y entregarle su correo una vez por mes.

18. La fuente informa de que el abogado del Sr. Munene ha seguido enviando cartas a las autoridades solicitando atención médica adecuada para su cliente.

19. La fuente sostiene que, teniendo en cuenta la evolución de la situación política y el cambio de presidencia, en 2019 ya no había absolutamente ninguna razón que justificara el mantenimiento del Sr. Munene en un régimen de detención estricto por supuestas consideraciones de protección de su seguridad personal. Su abogado solicitó, en cartas fechadas el 30 de enero de 2019 y el 11 de julio de 2019, su puesta en libertad y la restitución de su pasaporte angoleño para permitir su salida del territorio de la República del Congo. No recibió ninguna respuesta.

20. La fuente afirma que sigue siendo imposible para el Sr. Munene presentar un recurso contra su detención ilegal. Al mismo tiempo, fueron presentadas sendas solicitudes de asilo a Sudáfrica y Suiza, pero hasta la fecha ni siquiera han sido tramitadas.

21. La fuente señala asimismo que el Sr. Munene vuelve a encontrarse en régimen de arresto domiciliario desde diciembre de 2019. Permanece bajo vigilancia las 24 horas del día y no puede abandonar el territorio de la República del Congo, ni siquiera para recibir la atención médica que necesita urgentemente. La fuente explica que vive con su mujer y su hija menor pero carece de libertad de movimientos. Sostiene que vive bajo constante vigilancia armada y que tiene prohibido salir de su residencia, recibir cualquier tipo de visitas (tan solo pudo recibir la visita de su médico en una única ocasión) y establecer cualquier clase de comunicación.

b) Análisis jurídico

22. Según la fuente, la detención del Sr. Munene es arbitraria con arreglo a las categorías I, III y V.

i. Categoría I

23. La fuente recuerda que, desde su llegada al territorio de la República del Congo, el Sr. Munene se ha visto privado de libertad de circulación. En septiembre de 2010 fue puesto bajo arresto domiciliario y sometido a vigilancia permanente en una mansión ubicada en Ewo. No podía abandonar libremente su residencia ni salir del país. Entre enero de 2018 y diciembre de 2019, tras su estancia en el Gabón, el Sr. Munene permaneció detenido en la Dirección General de Vigilancia del Territorio, sometido a un régimen muy duro. Prácticamente no mantenía ningún contacto con sus allegados y le resultaba difícil comunicarse con su abogado. Desde diciembre de 2019 se encuentra nuevamente bajo arresto domiciliario. Carece de libertad de movimientos y no puede circular libremente fuera de su residencia ni salir del país. Además, es vigilado las 24 horas del día. La fuente refiere por tanto varios períodos de privación de libertad.

24. La fuente recuerda que el arresto domiciliario está considerado como una privación de libertad, al igual que la detención propiamente dicha¹.

25. Por consiguiente, la fuente alega que puede considerarse que la privación de libertad del Sr. Munene se remonta a septiembre de 2010, es decir un decenio.

26. Desde esa fecha, no se ha emitido ninguna orden de detención que justifique la privación de libertad del Sr. Munene, que nunca ha sido llevado ante un juez nacional. No se ha dictado ninguna orden judicial. No se ha aducido ninguna razón jurídica que justifique su arresto domiciliario y posterior detención en la Dirección General de Vigilancia del Territorio. La única razón invocada oralmente es su seguridad, ya que se encuentra supuestamente bajo la protección personal del Presidente de la República. Según la fuente, su caso constituye una detención arbitraria en virtud de la categoría I.

27. La fuente recuerda asimismo que el Sr. Munene nunca ha aceptado la medida de privación de libertad que se le ha impuesto. Por el contrario, intenta recuperar su libertad y abandonar libremente el territorio de la República del Congo.

28. La fuente sostiene, por otro lado, que los motivos de la privación de libertad son falaces. Con el pretexto de la asistencia humanitaria, el Sr. Munene ha quedado, en efecto, a merced de las autoridades de la República del Congo. No dispone de ningún documento que lo habilite a permanecer legalmente en ese país. No puede solicitar el estatuto de refugiado ante el Comité Nacional de Asistencia a los Refugiados, ente responsable de la concesión de dicho estatuto, ya que los servicios de la Dirección General de Vigilancia del Territorio, que representa al Ministerio del Interior, forman parte de dicho Comité. Así pues, depende de manera totalmente arbitraria de las autoridades de la República del Congo, país en el que carece de existencia legal.

29. Por consiguiente, no hay ninguna orden de detención que justifique la privación de libertad del Sr. Munene y su detención carece de todo fundamento jurídico. La fuente concluye que la detención del Sr. Munene es arbitraria conforme la categoría I.

30. Por otro lado, la fuente sostiene que la detención prolongada y sin supervisión judicial del Sr. Munene también confiere carácter arbitrario a su detención con arreglo a la categoría I. En este contexto, la fuente recuerda que el Sr. Munene ha pasado casi diez años privado de libertad y nunca ha sido llevado ante un juez, en contravención del artículo 9, párrafo 3, del Pacto, durante su arresto domiciliario o su reclusión en la Dirección General de Vigilancia del Territorio.

ii. Categoría III

31. Según la fuente, el Sr. Munene tuvo dificultades para comunicarse con su abogado, ya que no se le brindó ningún medio para consultarlo libremente y en régimen de absoluta confidencialidad. Considera que eso contraviene el principio 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, así como el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto.

¹ Véanse *Yklymova c. Turkmenistán* (CCPR/C/96/D/1460/2006); y deliberación núm. 1 del Grupo de Trabajo (E/CN.4/1993/24, secc. II).

32. Asimismo, todas las visitas del abogado del Sr. Munene, entre el 8 y el 15 de junio de 2018, fueron sometidas a la vigilancia directa y presencial de un guardia o agente de la Dirección General de Vigilancia del Territorio.

33. La fuente concluye, en vista de estos hechos, que se restringió la comunicación entre el Sr. Munene y su abogado.

34. Por otro lado, la fuente sostiene que el Sr. Munene fue aislado de su familia y allegados, en contravención de los principios 15, 16, párrafo 1, y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, así como de las reglas 43, párrafo 3, 58, párrafo 1, y 68 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). En efecto, durante el período que pasó detenido en la Dirección General de Vigilancia del Territorio, no pudo mantener más que contactos sumamente limitados con sus allegados. Solo uno de ellos estaba autorizado a llevarle el correo una vez por mes. No se le permitieron más contactos.

35. Así pues, la fuente concluye que el impacto de esas restricciones y de la situación de aislamiento sobre el carácter imparcial del procedimiento es suficientemente grave para considerar la detención como arbitraria conforme a la categoría III.

iii. Categoría V

36. La fuente recuerda que la privación de libertad constituye una detención arbitraria cuando pone de manifiesto una discriminación por motivos de opinión política. Recuerda asimismo que el Sr. Munene, militar de carrera, es conocido por su trayectoria política. Miembro del Gobierno de la República Democrática del Congo constituido tras la caída del régimen de Mobutu, fue posteriormente apartado al tomar el poder Joseph Kabila. Según la fuente, las autoridades querían deshacerse de todos los miembros del anterior Gobierno, especialmente del Sr. Munene, alta figura tutelar y militar del país. Reitera que este creó entonces su propio partido político, cuyas actividades políticas fueron sin embargo obstaculizadas por el aparato de poder.

37. La fuente sostiene que su oposición política al régimen puso en peligro la integridad física y la vida del Sr. Munene, lo que condujo a su exilio en la República del Congo.

38. La fuente alega, por consiguiente, que lo que el Sr. Munene representa políticamente a ojos de la opinión pública de la República Democrática del Congo desempeña un papel fundamental en el presente caso. En efecto, si bien no es un opositor político del régimen de la República del Congo, ha sido y sigue siendo considerado una amenaza política en la República Democrática del Congo.

39. La fuente señala, en este contexto, que el Sr. Munene denunció en numerosas ocasiones las masacres, las violaciones y las emboscadas perpetradas en el este la República Democrática del Congo, así como el tráfico ilegal de materias primas, la corrupción, la apropiación indebida de fondos públicos, el expolio de bienes ajenos, los salarios impagados, el desempleo, la pobreza, las elecciones amañadas, la degradación de las instituciones y las estructuras, la inseguridad, la injusticia, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones sumarias y las vulneraciones de los derechos humanos en la República Democrática del Congo.

40. La fuente recuerda asimismo que la República Democrática del Congo ha solicitado la extradición del Sr. Munene en relación con la condena a cadena perpetua en rebeldía que le impuso el Tribunal Militar de Matadi por conspiración contra el Estado. Según la fuente, pese a denegar la solicitud de extradición, la República del Congo se niega a poner en libertad al Sr. Munene debido a un pacto alanzado por ambos países para apartarlo de la vida política de la República Democrática del Congo, privándolo de su libertad física, así como de su libertad de expresión.

41. Por otro lado, la fuente alega que en vista de la presión ejercida por las autoridades de la República Democrática del Congo sobre las autoridades de la República del Congo el Sr. Munene corre en todo momento el riesgo de ser devuelto a la República Democrática del Congo y ser ejecutado en dicho país.

42. La fuente sostiene por tanto que, con el pretexto de prestarle asistencia humanitaria, pero sin reconocerle ningún derecho a la protección internacional concedida a los refugiados políticos, las autoridades de hecho mantienen detenido ilegalmente al Sr. Munene y aplican de manera encubierta la cadena perpetua dictada contra él en la República Democrática del Congo.

43. Así pues, a juicio de la fuente, la detención del Sr. Munene se debe a sus opiniones políticas, por lo que su detención se considera arbitraria con arreglo a la categoría V.

Respuesta del Gobierno

44. El 6 de abril de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno una comunicación relativa al Sr. Munene. Rogó al Estado parte que le proporcionara, a más tardar el 5 de junio de 2020, información detallada sobre el Sr. Munene. Más concretamente, le pidió que aclarara cuáles eran las disposiciones jurídicas que justificaban su mantenimiento en reclusión, así como la compatibilidad de dichas disposiciones con las obligaciones que incumben a la República del Congo en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y en particular con los tratados ratificados por el Estado. Por otro lado, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno a que garantizara la integridad física y mental del Sr. Munene.

45. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta alguna a esa comunicación por parte del Gobierno, que tampoco solicitó prorrogar el plazo de respuesta, pese a que los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo se lo hubieran permitido. Observa con preocupación que el Gobierno no ha aprovechado la oportunidad de responder o no ha respondido oportunamente, en el marco del procedimiento ordinario del Grupo de Trabajo, en los últimos años². El Grupo de Trabajo invita al Gobierno a colaborar de manera constructiva respecto de todas las alegaciones relacionadas con la privación arbitraria de libertad.

Deliberaciones

46. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

47. Para determinar si la privación de libertad del Sr. Munene es arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia sobre cómo proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de las normas internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno, en el caso de que decida refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no refutar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

48. Antes de examinar si la detención del Sr. Munene es arbitraria, es preciso determinar los períodos durante los cuales ha permanecido detenido. Según la fuente, el Sr. Munene ha permanecido detenido durante tres períodos desde su llegada a la República del Congo, en septiembre de 2010: a) entre el 29 de septiembre de 2010 y diciembre de 2017, bajo arresto domiciliario; b) entre el 12 de enero de 2018 y diciembre de 2019, en los locales de la Dirección General de Vigilancia del Territorio; y c) desde diciembre de 2019 hasta la fecha, bajo arresto domiciliario. La fuente sostiene que las condiciones de detención del Sr. Munene durante cada uno de esos períodos equivalen a una privación de libertad.

49. Más concretamente, la fuente alega que, entre el 29 de septiembre de 2010 y diciembre de 2017, es decir, durante más de siete años, el Sr. Munene permaneció en arresto domiciliario en una mansión perteneciente a la República del Congo ubicada en Ewo, cerca de la frontera gabonesa. Según la fuente, el Sr. Munene no podía moverse libremente fuera de la residencia y estaba sujeto a la vigilancia permanente de guardias armados o de civil. Sus comunicaciones fueron estrictamente reducidas al “mínimo” y todas las comunicaciones escritas y telefónicas fueron vigiladas y supeditadas a autorización.

50. Por otro lado, entre el 12 de enero de 2018 y diciembre de 2019, es decir, a lo largo de casi dos años, el Sr. Munene permaneció detenido en los locales de la Dirección General de Vigilancia del Territorio en un régimen de detención muy estricto. Según la fuente, el

² Véanse las opiniones núms. 56/2018, 5/2018, 25/2017 y 44/2014.

Sr. Munene prácticamente no mantuvo ningún contacto con sus familiares y le fue difícil comunicarse con su abogado. Un allegado estaba autorizado a llevarle el correo una vez por mes.

51. Finalmente, desde diciembre de 2019 hasta la fecha, o sea, desde hace casi un año, el Sr. Munene vuelve a encontrarse bajo arresto domiciliario. Vigilado las 24 horas del día, no puede abandonar el territorio de la República del Congo, ni tan siquiera para recibir atención médica urgente. Según la fuente, vive con su mujer y su hija menor, pero no tiene libertad de movimientos, ya que no se le permite salir de su residencia. El Sr. Munene vive bajo constante vigilancia armada, no se le ha permitido recibir ninguna visita, salvo la de su médico en una única ocasión, y tiene prohibida toda comunicación.

52. En su deliberación núm. 1 sobre el arresto domiciliario, el Grupo de Trabajo señala que “el arresto domiciliario puede compararse a la privación de libertad, siempre que se efectúe en locales cerrados que la persona no esté autorizada a abandonar”³. Precisa, acto seguido, que determinar si una persona se encuentra privada de libertad remite a una cuestión de hecho y que si es libre de abandonar el lugar en todo momento, no puede considerarse privada de libertad⁴. El Grupo de Trabajo evalúa caso por caso si una persona ha sido efectivamente privada de libertad.

53. Aplicando estos principios, el Grupo de Trabajo constata que el Sr. Munene fue claramente privado de libertad durante cada uno de estos tres períodos. En cada ocasión, permaneció detenido en locales de los que no se le permitía salir y fue sometido a una vigilancia permanente, al control de sus comunicaciones y a restricciones de sus contactos con el mundo exterior. Al margen de un breve período durante el cual intentó trasladarse al Gabón, entre diciembre de 2017 y el 12 de enero de 2018, el Sr. Munene ha permanecido detenido ininterrumpidamente durante más de diez años, desde el 29 de septiembre de 2010. Paralelamente a esta conclusión, el Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no ha presentado ninguna información que permita cuestionar las alegaciones de la fuente.

54. El Grupo de Trabajo pasa ahora a examinar si la detención del Sr. Munene desde septiembre de 2010 es arbitraria.

Categoría I

55. La fuente señala que el Sr. Munene se exilió en la República del Congo tras varios intentos de asesinato y ataques sufridos cuando residía en Kinshasa. Cuando el Sr. Munene entró en la República del Congo, el 29 de septiembre de 2010, las autoridades del país lo detuvieron con fines de protección bajo el pretexto de garantizar su seguridad. Le confiscaron sus dos pasaportes y el Sr. Munene carece de todo estatuto jurídico oficial en la República del Congo. No puede solicitar el asilo o el estatuto de refugiado, ya que la Dirección General de Vigilancia del Territorio forma parte del organismo responsable de la concesión de dicho estatuto. Según la fuente, el 4 de marzo de 2011, el Sr. Munene fue condenado en rebeldía a cadena perpetua por un tribunal militar de la República Democrática del Congo por conspiración contra la seguridad del Estado. A pesar de las solicitudes de extradición presentadas por la República Democrática del Congo, la República del Congo se ha negado a extraditarlo y prefiere mantenerlo indefinidamente detenido con el pretexto de prestarle asistencia humanitaria.

56. El Grupo de Trabajo considera que la detención del Sr. Munene en la República del Congo, desde el 29 de septiembre de 2010 hasta la fecha, carece de fundamento jurídico. Según la información aportada por la fuente, que el Gobierno no ha cuestionado, en la República del Congo no se presentaron cargos ni se iniciaron procedimientos judiciales contra el Sr. Munene y ninguna ley ampara su detención.

57. Por lo demás, como ya ha indicado el Grupo de Trabajo, la privación de libertad para proteger a una persona debe ser utilizada únicamente como último recurso, cuando la persona

³ Opiniones núms. 10/2020, párr. 57; y núm. 16/2011, párr. 14.

⁴ A/HRC/36/37, párrs. 50 a 56; y A/HRC/30/37, párr. 9. Véanse también las opiniones núm. 56/2018, párr. 43; núm. 37/2018, párr. 25; 30/2012, párr. 15; 16/2011, párr. 7; 13/2007, párr. 24; 47/2006, párr. 30; y 11/2001, párr. 12.

desee esa protección, y bajo supervisión de una autoridad judicial⁵. En este caso, la detención no fue el último recurso sino la respuesta inmediata de las autoridades. El Grupo de Trabajo considera que se podrían haber encontrado alternativas a la detención para proporcionar una protección adecuada al Sr. Munene, como ofrecerle asilo al término de una evaluación independiente en la que no interviniera la Dirección General de Vigilancia del Territorio, o devolverle el pasaporte para que pudiera pedir asilo en otro país. Por otro lado, es evidente que el Sr. Munene no acepta la medida de privación de libertad, dados sus numerosos esfuerzos por obtener el asilo en terceros países y salir libremente del territorio de la República del Congo. Su detención no fue objeto de supervisión judicial, como se indica más adelante.

58. Por otro lado, el Grupo de Trabajo no puede aceptar que esté justificado mantener al Sr. Munene bajo protección durante más de diez años⁶, especialmente teniendo en cuenta que la situación política de la República Democrática del Congo parece haber mejorado desde que se exilió. En particular, el Gobierno no ha aportado ninguna explicación respecto de la necesidad de mantener detenido al Sr. Munene por su seguridad personal al cabo de un período de detención tan largo⁷.

59. La fuente afirma, asimismo, y el Gobierno no lo ha desmentido, que el Sr. Munene nunca tuvo la posibilidad de impugnar la legalidad de su detención ante una autoridad judicial de la República del Congo, en el transcurso de su arresto domiciliario y de su detención en los locales de la Dirección General de la Vigilancia del Territorio. El hecho de que las autoridades no le brindaran la posibilidad de impugnar su detención contraviene manifiestamente el derecho que le asiste en virtud del artículo 9, párrafo 4, del Pacto a recurrir ante un tribunal a fin de que las autoridades judiciales decidan a la brevedad posible sobre la legalidad de su detención. El derecho a impugnar la legalidad de la detención, tanto al principio del período de detención como periódicamente a partir de ese momento, se aplica a todas las situaciones de privación de libertad, incluida la detención preventiva⁸. Esta supervisión judicial de la privación de libertad es una salvaguardia fundamental de la libertad personal y resulta esencial para la fundamentación jurídica de la reclusión⁹. El Sr. Munene no pudo impugnar su detención, lo que vulnera su derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

60. El Grupo de Trabajo considera, en el caso del Sr. Munene, que la imposibilidad de impugnar su detención en virtud del artículo 9, párrafo 4 del Pacto se vio agravada por su acceso restringido a un abogado a lo largo de toda su detención. En particular, no pudo consultar a su abogado en régimen de absoluta confidencialidad. El libre acceso a un abogado desde el comienzo mismo de la detención es una garantía esencial para que el detenido pueda impugnar el fundamento jurídico de su detención¹⁰.

61. Por estas razones, el Grupo de Trabajo concluye que la detención del Sr. Munene desde septiembre de 2010 hasta la fecha carece de fundamento jurídico, contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto, y es arbitraria conforme a la categoría I.

⁵ E/CN.4/2002/77, párr. 61; y E/CN.4/2003/8, párr. 65 (relativo a la detención de mujeres vulnerables, pero aplicable asimismo en el presente caso).

⁶ Opinión núm. 9/2004, párr. 13 (que concluye que no es posible mantener a una persona bajo arresto domiciliario, con supuestos fines de protección personal, durante un año, en contra de su voluntad). Véase también la opinión núm. 15/2009, párrs. 21 a 26 (acerca de la falta de fundamento jurídico para mantener la detención policial con fines de protección).

⁷ Incluso de haberse aducido motivos de seguridad para justificar su detención, se hubiera incurrido en una detención arbitraria, ya que había otras medidas eficaces disponibles para hacer frente a la amenaza, incluido el sistema de justicia penal. Véase: Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 15.

⁸ A/HRC/30/37, párr. 9; y A/HRC/22/44, párr. 82 b).

⁹ A/HRC/30/37, párr. 3. Véase también el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principio 4.

¹⁰ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), principio 9 y directriz 8; véase también la opinión núm. 40/2020, párr. 29.

Categoría II

62. Según la fuente, el Sr. Munene participó activamente en la vida política de la República Democrática del Congo antes de exiliarse en la República del Congo, en septiembre de 2010. Tras ser obligado a pasar al retiro en 2006, formó un partido político conocido como la Convención del Pueblo para el Progreso y la Democracia y se presentó a las elecciones. Sin embargo, la fuente afirma que las actividades políticas de este partido fueron obstaculizadas por las autoridades.

63. Por otro lado, la fuente señala que el Sr. Munene se pronunció en contra de las matanzas, las violaciones y otras infracciones cometidas en el este de la República Democrática del Congo, así como sobre otras cuestiones de interés público como la corrupción, la malversación de fondos públicos, el desempleo, la pobreza, la celebración de elecciones en condiciones de desigualdad, la detención arbitraria, las ejecuciones sumarias y la falta de respeto por los derechos humanos en ese país. La fuente alega que, si bien la República del Congo se negó a extraditar al Sr. Munene a la República Democrática del Congo, lo mantiene detenido en virtud de un acuerdo alcanzado por ambos países para apartarlo de la vida pública y privarlo de su libertad de expresión. El Grupo de Trabajo señala que el Gobierno no presentó información ni explicación alguna en respuesta a las alegaciones de la fuente.

64. El Grupo de Trabajo recuerda que el artículo 19, párrafo 2, del Pacto dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Abarca asimismo el pensamiento político, los comentarios sobre los asuntos públicos y la discusión sobre los derechos humanos¹¹. Ampara la defensa y la expresión de opiniones, incluidas aquellas que son críticas o no conformes con la política gubernamental¹². El Grupo de Trabajo considera que la conducta del Sr. Munene se inscribe en el derecho a la libertad de opinión y de expresión, protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto, y que fue detenido inicialmente y permanece detenido hasta hoy por haber ejercido este derecho.

65. Por otro lado, las críticas del Sr. Munene a la política gubernamental, expresadas en sus comentarios sobre diversas cuestiones relativas a la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, atañían a cuestiones de interés público. El Grupo de Trabajo considera que fue detenido, inicialmente, y ha permanecido detenido hasta hoy, por haber ejercido su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos previsto en el artículo 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25 a) del Pacto¹³.

66. No hay motivos para pensar que puedan aplicarse en este caso las restricciones permisibles de los derechos mencionados, enunciados en el artículo 19, párrafo 3, y el artículo 25 del Pacto. El Grupo de Trabajo no está convencido de que la detención del Sr. Munene fuera necesaria para proteger un interés legítimo en virtud de estas disposiciones, ni de que su detención por un período indefinido desde hace diez años constituya una respuesta proporcionada a sus anteriores actividades en la República Democrática del Congo. Es importante señalar que no hay pruebas de que las críticas del Sr. Munene al Gobierno hayan constituido, directa o indirectamente, un llamamiento a la violencia o puedan considerarse razonablemente una amenaza para la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y la reputación de terceros. El Consejo de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que se abstengan de imponer restricciones en virtud del artículo 19, párrafo 3, si no son conformes con las normas internacionales de derechos

¹¹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011), párr. 11.

¹² Opinión núm. 8/2019, párr. 55; y opinión núm. 79/2017, párr. 55.

¹³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 25 (1996), párr. 8 (en el que se señala que los ciudadanos pueden participar en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate público). Véanse también las opiniones núms. 36/2020, 16/2020, 15/2020 y 45/2019.

humanos¹⁴. El Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

67. El Grupo de Trabajo concluye que la detención del Sr. Munene desde septiembre de 2010 hasta la fecha es consecuencia del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión y expresión, así como de su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, en vulneración de los artículos 19 y 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 19 y 25 a) del Pacto. Su detención es arbitraria conforme a la categoría II.

Categoría III

68. La fuente afirma que se restringió el derecho del Sr. Munene a comunicarse libremente y en régimen de absoluta confidencialidad con su abogado durante todo el período de reclusión, en violación del principio 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y del artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto.

69. En particular, tras quedar recluso en la Dirección General de Vigilancia del Territorio, en enero de 2018, su abogado se puso en contacto con las autoridades de la República del Congo para conocer los motivos de su detención y solicitar su puesta en libertad. El abogado del Sr. Munene también lo visitó en los locales de la Dirección General, en junio de 2018, pese a los esfuerzos de las autoridades por forzar el aplazamiento de su viaje y disuadirlo de visitar a su cliente. La fuente afirma que todas las visitas del abogado al Sr. Munene entre el 8 y el 15 de junio de 2018 fueron sometidas a la supervisión directa y presencial de un guardia o agente de la Dirección General. El Sr. Munene también vio restringido su derecho a recibir visitas y a comunicarse con el mundo exterior durante sus dos períodos de arresto domiciliario. La fuente concluye por consiguiente que la detención del Sr. Munene es arbitraria con arreglo a la categoría III.

70. En el presente caso, la detención del Sr. Munene no está relacionada con una causa penal, ya que no se formularon cargos ni se instruyeron procedimientos en su contra y no es objeto de procedimientos de extradición para ser juzgado en la República Democrática del Congo. De hecho, ya fue condenado a cadena perpetua en rebeldía. Su detención con fines de protección es más bien una forma de detención administrativa¹⁵. Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha determinado que, en los casos de detención excesivamente prolongada, el interesado debe gozar de las mismas garantías de un juicio imparcial que en las causas penales, incluso cuando se trate de una detención administrativa¹⁶. El Sr. Munene ha pasado más de diez años detenido en condiciones punitivas similares a las de una condena penal¹⁷. El Grupo de Trabajo concluye por consiguiente que la detención es arbitraria con arreglo a la categoría III. A este respecto, reitera que el Gobierno no ha respondido a ninguna de las alegaciones de la fuente.

71. Las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir asistencia jurídica de un abogado de su elección, en cualquier momento durante su privación de libertad, en particular inmediatamente después de su detención, y ese acceso se debe facilitar sin demora¹⁸. El Grupo de Trabajo considera que el hecho de que el Sr. Munene no haya tenido acceso a su abogado durante el período de su detención, así como la supervisión y la presencia de guardias durante las entrevistas con su abogado, vulneraron su derecho a comunicarse con un abogado y a recibir asistencia letrada, de conformidad con los principios 11, párrafo 1, 15, 17 y 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a

¹⁴ Resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 5 p).

¹⁵ La detención administrativa es la privación de libertad de una persona ordenada por el poder ejecutivo del Estado, en vez de por el poder judicial; E/CN.4/Sub.2/1989/27, párr. 17.

¹⁶ Véanse las opiniones núms. 49/2020, 12/2020, 73/2018 y 31/2017. Véase, asimismo, Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 15.

¹⁷ El Grupo de Trabajo observa que, en vista de los hechos expuestos, el Sr. Munene nunca fue juzgado ni participó en ningún procedimiento judicial en la República del Congo que hubiera podido cumplir los requisitos enunciados en el artículo 14 del Pacto.

¹⁸ A/HRC/30/37, anexo, principio 9 y directriz 8.

Cualquier Forma de Detención o Prisión. Las consultas jurídicas se pueden celebrar a la vista de las autoridades, a condición de que estas no puedan oírlos, y deben ser confidenciales¹⁹.

72. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que las limitaciones impuestas al derecho del Sr. Munene de acceder a su abogado han contribuido a que permanezca detenido durante un período excesivo y son, por consiguiente, de una gravedad tal que confieren a su detención un carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

Categoría V

73. La fuente alega que el Sr. Munene fue detenido debido a sus opiniones políticas. Considera que es conocido por su trayectoria política. Fue miembro del Gobierno de la República Democrática del Congo tras la caída del régimen de Mobutu y apartado de sus funciones al tomar el poder Joseph Kabila. La fuente afirma asimismo que la influencia política del Sr. Munene en la República Democrática del Congo es fundamental en el presente caso. Si bien no es un opositor político del régimen de la República del Congo, ha sido y sigue siendo considerado como una amenaza política en la República Democrática del Congo. Las autoridades de la República del Congo aplican por tanto de manera encubierta la condena a cadena perpetua en rebeldía dictada en su contra en la República Democrática del Congo.

74. En ausencia de toda respuesta del Gobierno acerca de las alegaciones de la fuente o de las razones por las que se mantiene al Sr. Munene detenido con fines de protección al cabo de diez años, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que está detenido por motivos discriminatorios a causa de sus opiniones políticas o de otro tipo. Como se ha indicado anteriormente, el Gobierno podría haber ofrecido asilo al Sr. Munene o autorizar su salida de la República del Congo para que solicitara asilo en otro país. No parece que se hayan estudiado esas medidas, lo que parece sugerir que la causa de la detención del Sr. Munene sean sus actividades políticas anteriores en la República Democrática del Congo. Por otro lado, en la deliberación anterior relativa a la categoría II, el Grupo de Trabajo determinó que la privación de libertad del Sr. Munene era consecuencia del ejercicio pacífico de los derechos que lo asisten en virtud del derecho internacional. Cuando se establece que la privación de libertad obedece al ejercicio activo de derechos civiles y políticos hay una fundada presunción de que esa privación de libertad constituye también una vulneración del derecho internacional en razón de una discriminación basada en opiniones políticas o de otra índole²⁰. Su privación de libertad infringe los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto, y es arbitraria con arreglo a la categoría V.

Observaciones finales

75. La fuente señala que durante su detención en los locales de la Dirección General de Vigilancia del Territorio el Sr. Munene fue aislado de su familia y allegados. Durante este período, el Sr. Munene mantuvo contactos sumamente limitados con el mundo exterior, ya que una sola persona allegada estaba autorizada a llevarle el correo una vez por mes. El Grupo de Trabajo considera que las restricciones impuestas al Sr. Munene para comunicarse con su familia y allegados vulneraron su derecho a comunicarse con el mundo exterior en virtud de los principios 15 y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

76. Por otro lado, al Grupo de Trabajo le preocupa profundamente el hecho de que nunca se llegara a dispensar atención médica adecuada al Sr. Munene, pese a que padecía hipertensión y cáncer. No se organizó ninguna consulta ambulatoria o especializada ni se le permitió salir para recibir tratamiento médico. El abogado del Sr. Munene envió varias cartas a las autoridades para solicitar que se le proporcionara atención médica. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que ponga en libertad de inmediato al Sr. Munene y se asegure de que

¹⁹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32, párr. 34; Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principio 18; A/HRC/30/37, anexo, directriz 8; y opinión núm. 59/2020, párr. 78.

²⁰ Opiniones núms. 42/2020, párr. 93; 36/2020, párr. 75; 59/2019, párr. 79; 13/2018, párr. 34; y 88/2017, párr. 43.

reciba la atención médica necesaria. El Grupo de Trabajo aprovecha esta oportunidad para recordar al Gobierno su obligación, establecida en el artículo 10, párrafo 1, del Pacto, de velar por que todas las personas privadas de libertad sean tratadas humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

77. El Grupo de Trabajo reconoce que todos los Estados tienen la obligación de velar por que se castigue a las personas responsables de la comisión de delitos. No obstante, la opinión del Grupo de Trabajo respecto de este caso no atañe a los procedimientos abiertos con anterioridad en contra del Sr. Munene en la República Democrática del Congo, sino a las condiciones en que se encuentra actualmente detenido. Los Estados deben respetar las disposiciones del Pacto y en el presente caso se han determinado infracciones²¹.

78. Al Grupo de Trabajo le complacería llevar a cabo una visita a la República del Congo para entablar un diálogo constructivo con el Gobierno y tratar los problemas relativos a la privación arbitraria de libertad.

Decisión

79. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Benoît Faustin Munene es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 7, 8, 9, 19 y 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafos 1 y 3, 9, 19, 25 a) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

80. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la República del Congo que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Munene sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

81. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidos los riesgos para la salud del Sr. Munene, el remedio adecuado sería poner al Sr. Munene inmediatamente en libertad, restituirle sus pasaportes y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional²².

82. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Munene y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

83. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión para que tome las medidas correspondientes.

84. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

85. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Munene y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Munene;

²¹ Opinión núm. 1/2020, párr. 74.

²² Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, deliberación núm. 10 (A/HRC/45/16, anexo I) (en la que se determinan las reparaciones completas a las que tienen derecho las víctimas de privación arbitraria de libertad).

c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Munene y, de ser así, el resultado de la investigación;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la República del Congo con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

86. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

87. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

88. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado²³.

[Aprobada el 23 de noviembre de 2020]

²³ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.